



Asamblea General

Sexagésimo tercer período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general
5 de diciembre de 2008
Español
Original: inglés

Sexta Comisión

Acta resumida de la 20ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 30 de octubre de 2008, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Al Bayati (Iraq)

Sumario

Tema 75 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 60º período de sesiones (*continuación*)

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, y *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación*, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

08-57726 (S)



Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.

Tema 75 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 60º período de sesiones (continuación)
(A/63/10)

1. **El Sr. Winkler** (Dinamarca), que interviene en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), dice que, por lo que respecta al tema “Responsabilidad de las organizaciones internacionales”, los países nórdicos están básicamente de acuerdo con los proyectos de artículo 46 a 60, que ofrecen una buena base para seguir trabajando en el futuro. El proyecto de artículo 48 regula correctamente la cuestión de la admisibilidad de las reclamaciones contra organizaciones internacionales, en relación con la cual podría y debería aplicarse el requisito del agotamiento de los recursos internos, con la salvedad de que los recursos internos de las organizaciones internacionales sólo deben considerarse agotados en la medida en que estén disponibles y sean eficaces. Las modalidades de agotamiento deben diferenciarse claramente de las disponibles a nivel nacional y, como ha observado la Comisión, deben incluir los diversos tribunales y órganos internos competentes para conocer de los asuntos de que se trate. En cuanto a los proyectos de artículo 54 a 60, relativos a las contramedidas, los países nórdicos comparten el enfoque del Comité de Redacción: las normas de la organización deben primar como *lex specialis* sobre el derecho internacional general relativo a las contramedidas cuando la controversia enfrente a la organización con uno de sus Estados Miembros.

2. En lo que se refiere al tema “Expulsión de extranjeros”, no deben incluirse en el debate las cuestiones de nacionalidad y ciudadanía, sobre todo la privación de nacionalidad de los ciudadanos, ya que tienden a desplazar la atención del asunto fundamental, a saber, el derecho de los Estados a expulsar extranjeros. A este respecto, los países nórdicos preferirían que se elaborara una serie de principios generales que tengan en cuenta todas las normas pertinentes, en lugar de redactar artículos destinados a codificar el derecho consuetudinario a fin de colmar posibles lagunas en el derecho convencional existente. Tales proyectos de artículo suelen dar lugar a una confluencia poco afortunada de normas de diferentes sectores del derecho, algunas de las cuales son

susceptibles de codificación internacional, mientras que, en otros casos, se refieren a esferas, como la migración laboral, donde aparentemente no hay necesidad de codificar.

3. El derecho de un Estado a expulsar extranjeros es inherente a la soberanía estatal, pero debe ejercerse de conformidad con el derecho internacional, teniendo plenamente en cuenta los actuales desafíos del ordenamiento jurídico internacional. Ese derecho lleva aparejada la correspondiente obligación de los Estados de readmitir a sus propios nacionales, que actualmente es uno de los principales problemas que se plantean en relación con la expulsión de extranjeros, cuestión sobre la que ya existe un importante volumen de normas de derecho internacional. Por consiguiente, los países nórdicos instan a la Comisión a que centre su atención en los principios aplicables a las situaciones en que se produce la expulsión de un extranjero, más que en intentar redactar nuevos proyectos de artículo.

4. **El Sr. Hernández** (México) dice, en relación con el tema “Reservas a los tratados”, que el decimotercer informe del Relator Especial (A/CN.4/600) analiza de forma minuciosa los complejos problemas jurídicos que plantea la cuestión. En dicho informe se destaca el paralelismo de procedimiento entre la formulación de declaraciones interpretativas y de objeciones a las mismas y la formulación de reservas y de objeciones a las reservas, tomando en consideración que existen diferencias importantes en cuanto a sus respectivos objetos y efectos jurídicos. En cuanto al proyecto de directriz 2.9.3, sobre la recalificación de una declaración interpretativa, su delegación coincide con el Relator Especial en que el efecto jurídico de una “recalificación” es modificar el régimen jurídico de la declaración unilateral en la relación entre el Estado o la organización que formula la declaración y el Estado o la organización que la “recalifica”. En el mismo sentido, el Relator Especial atina cuando señala que las normas y plazos procesales aplicables a la recalificación y a la objeción a una declaración interpretativa son los previstos en el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Transcurrido ese plazo, la recalificación como reserva y, por ende, la objeción a la misma ya no pueden surtir sus efectos jurídicos y la declaración interpretativa, si bien recalificada como reserva, deberá no obstante considerarse aceptada. Sin embargo, tomando en consideración la propuesta del Relator Especial en los proyectos de directriz 2.9.8

y 2.9.9, sobre la imposibilidad de presumir la aceptación de una declaración interpretativa y el papel que desempeña el silencio al respecto, la formulación actual de los proyectos de directriz sobre recalificación y aceptación de las declaraciones unilaterales calificadas como interpretativas establece una carga especialmente onerosa para los demás Estados partes en el instrumento. Dichos Estados, al estar sujetos, para recalificar y objetar, a los plazos aplicables a la objeción de reservas, verían limitada su capacidad de “recalificar” lo que el Estado autor de la declaración unilateral calificó originalmente como una mera declaración interpretativa. Ello podría tener como resultado que lo que algunos miembros de la Comisión calificaron de “reservas disfrazadas” pasen desapercibidas para los demás Estados partes. El Relator Especial señaló que las objeciones tardías a una reserva no producen todos los efectos de una verdadera objeción; no se las debe considerar objeciones per se, sino declaraciones interpretativas.

5. Por consiguiente, su delegación considera, al igual que algunos miembros de la Comisión, que los operadores y los depositarios necesitan indicadores específicos en cuanto a la forma, el plazo y los efectos jurídicos de las reacciones a las “reservas disfrazadas”. Tomando en consideración el término de 12 meses establecido para la formulación de una objeción, el lapso de tiempo previsto para los casos de “reservas disfrazadas” debe tener en cuenta el hecho de que la reserva en cuestión no haya sido presentada como tal, sino como declaración interpretativa. La segunda parte del proyecto de directriz 2.6.13 puede servir de base para solucionar esta situación excepcional en la medida en que establece que, para los casos en que la manifestación de consentimiento de un Estado u organización internacional para obligarse por el tratado sea posterior a los 12 meses siguientes a la fecha en que se haya recibido notificación de la reserva, el plazo empezará a correr a partir del momento en que la manifestación de voluntad para obligarse sea comunicada. La consiguiente ampliación del término de 12 meses podría ser retomada para los casos de “reservas disfrazadas”: el plazo para la formulación de objeciones en esos casos comenzará a contar a partir del momento en que esa reserva, de haber sido formulada como tal, habría entrado en vigor para los Estados partes en el tratado, con lo que se otorgarían 24 meses para la formulación de objeciones. Ese plazo extendido evitaría que, al pasar desapercibida como una declaración interpretativa, una “reserva disfrazada”

goce del mismo término que una reserva que haya sido formulada como tal. Además, se crearía certeza jurídica y se garantizaría que no quedara en un limbo la validez o entrada en vigor de una reserva.

6. En lo que atañe al proyecto de directriz 2.6.8, México sostiene que la introducción del adverbio “antes” tiene como consecuencia que la manifestación de voluntad a la que se alude no tenga que ser expresada por medio del mismo instrumento por el que se haya presentado la objeción, sino sólo previamente al momento en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Convención de Viena, el tratado entre en vigor entre las partes. Por consiguiente, la delegación de México se congratula por el otorgamiento de un plazo durante el cual las partes en un tratado podrán entablar consultas para evitar llegar a la declaración por la que se impida la entrada en vigor de la totalidad de las normas establecidas en un tratado, en razón de una reserva a una norma específica.

7. En cuanto al tema “Expulsión de extranjeros”, un catálogo claro de reglas jurídicas aplicables podría garantizar el respeto de los derechos humanos. Dado que, como ha observado el Relator Especial, cada Estado tiene competencia exclusiva para establecer las condiciones sobre la adquisición y pérdida de la nacionalidad, el análisis de la Comisión sólo es relevante en la medida en que sirva para determinar cuándo una persona tiene o no la calidad de extranjero y saber así si es válida o no la expulsión conforme al derecho internacional. El párrafo 2 del artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas dispone que la expulsión del apátrida únicamente se efectuará en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. Por consiguiente, el Relator Especial acierta al considerar que no resulta necesario un proyecto de artículo que refleje esta norma. Su delegación también coincide con varios miembros de la Comisión en que la situación de personas con doble o múltiple nacionalidad presenta características específicas que requieren ser analizadas en detalle. El orador confía en que, en su próximo informe, el Relator Especial inicie el estudio de los límites de expulsión relacionados con los derechos fundamentales de la persona.

8. **La Sra. Lijnzaad** (Países Bajos) dice, en relación con el tema “Reservas a los tratados”, que su delegación no está convencida de que el concepto de “declaración interpretativa condicional” tenga utilidad práctica. Cuando tales declaraciones condicionales

tienen consecuencias en gran medida similares a las de las reservas, deben considerarse y denominarse reservas. También discrepa de la opinión del Relator Especial de que el plazo para objetar a una declaración interpretativa recalificada es el mismo que el que existe para objetar a una reserva. Es un grave error utilizar la analogía de las reservas y las objeciones al tratar de las declaraciones interpretativas, especialmente cuando las reservas y las declaraciones interpretativas han sido formuladas por el mismo Estado. La carga de aclarar la intención que subyace a una declaración unilateral recae en el autor de la declaración; los demás Estados partes tienen una expectativa legítima de que el Estado autor dará a su declaración el nombre adecuado. Sólo cuando la declaración se califica de reserva puede el Estado autor confiar en que los demás Estados comprenderán debidamente el alcance de la declaración. La lógica del Relator Especial parece obrar en favor del Estado que da un nombre indebido a su declaración, a expensas del otro Estado.

9. El significado del silencio es una cuestión filosófica a la par que un problema complicado en el derecho internacional. En lo que respecta a las consecuencias del silencio como respuesta a una declaración interpretativa, especialmente en situaciones en las que un Estado ha formulado reservas y declaraciones interpretativas, el silencio simplemente significa silencio: no debe extraerse ninguna conclusión de él ni debe inferirse aquiescencia alguna. Pensar lo contrario significaría, una vez más, establecer una analogía indebida con las reservas y las objeciones e ignorar la decisión del Estado autor de no calificar su declaración unilateral como reserva propiamente dicha. Su delegación se propone realizar más adelante observaciones más detalladas sobre este particular.

10. Como Estado anfitrión de unas 30 organizaciones internacionales, los Países Bajos están especialmente interesados en el tema “Responsabilidad de las organizaciones internacionales”. Las críticas que con frecuencia se dirigen a la Comisión por basarse excesivamente en los artículos sobre la responsabilidad del Estado al elaborar el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales carecen de fundamento. Los artículos sobre la responsabilidad del Estado son lo suficientemente generales como para ser aplicables a otras personas jurídicas internacionales, y la Comisión ha hecho los ajustes pertinentes y, en su caso, ha introducido

artículos nuevos para garantizar que el texto es adecuado para la situación de las organizaciones internacionales.

11. La necesidad de artículos específicos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales se ha cuestionado porque la práctica es limitada, según se indica en los informes del Relator Especial, y porque de los cientos de organizaciones internacionales que existen sólo unas pocas han remitido observaciones sobre el tema, algunas de ellas extraordinariamente breves. Sin embargo, su delegación considera que esos artículos son necesarios. El número de organizaciones internacionales ha crecido considerablemente y sus actividades afectan tanto a las relaciones internacionales como a la vida diaria de los particulares. Suele aceptarse, con razón, que las organizaciones internacionales están capacitadas para cometer actos internacionalmente ilícitos. Por consiguiente, es necesario disponer de un sistema que se ocupe de dichos actos aunque no exista una amplia práctica al respecto: es preferible que los tribunales apliquen normas generales sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales a que cada tribunal interprete a su manera las analogías con el régimen de responsabilidad del Estado.

12. La oradora apoya la propuesta de que se organice una reunión entre la Comisión y los asesores jurídicos de las organizaciones internacionales para que la Comisión se familiarice con la práctica existente. Su delegación facilitará comentarios más detallados por escrito, incluidas algunas observaciones sobre las contramedidas.

13. En cuanto al tema “Expulsión de extranjeros”, los Países Bajos comparten la opinión de que el derecho internacional no permite que los Estados consideren extranjeros a sus nacionales que además tengan otra u otras nacionalidades, especialmente si se tiene en cuenta el artículo 17 del Convenio Europeo sobre la Nacionalidad, que dispone que los nacionales de un Estado parte que posean otra nacionalidad tendrán, en el territorio del Estado parte en que residan, los mismos derechos y obligaciones que los nacionales de ese Estado parte. Además, la prohibición de expulsión de nacionales también se aplica a las personas con nacionalidad doble o múltiple.

14. El concepto de nacionalidad dominante o efectiva sólo suele aplicarse en casos de conflicto de nacionalidad derivados de la posesión de múltiples

nacionalidades, como en el contexto de la protección diplomática. Dado que tales situaciones son muy distintas de la cuestión de la expulsión de extranjeros, su delegación comparte la opinión de la Comisión de que el criterio de la nacionalidad dominante o efectiva no puede justificar que un Estado trate como extranjeros a sus nacionales que además tengan otra u otras nacionalidades a efectos de su expulsión.

15. Por lo que respecta al tema de la pérdida de la nacionalidad, la desnacionalización y la expulsión, el derecho internacional permite que los Estados contemplen en su derecho interno la posibilidad de perder la nacionalidad en ciertos casos. La legislación de los Países Bajos contiene ese tipo de disposiciones: por ejemplo, los nacionales de los Países Bajos pueden perder su nacionalidad si aceptan voluntariamente la de otro país. Sin embargo, la oradora está plenamente de acuerdo en que la desnacionalización sólo debe permitirse en circunstancias excepcionales y no debe provocar apatridia.

16. Por último, aunque es necesario aclarar que el proyecto de artículo 4 también se aplica a los nacionales con nacionalidad doble o múltiple, la oradora comparte la opinión de que no es preciso elaborar proyectos de artículo que regulen específicamente las cuestiones que se analizan en el cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/594).

17. **El Sr. Tavares** (Portugal) dice, en relación con el tema “Reservas a los tratados”, que, puesto que “reserva” y “declaración interpretativa” son conceptos jurídicos diferentes, deben regularse separadamente, excepto cuando entran en contacto. Dado que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados no regula las declaraciones interpretativas, su delegación propugna abordar ese tema con cautela.

18. Por lo que se refiere al proyecto de directriz 2.9.1, el término “aprobación” tiene una fuerte connotación jurídica que no es apropiada en lo que respecta a las declaraciones interpretativas. En su lugar debería utilizarse la palabra “consentimiento”, como en el proyecto de directriz 2.9.9. En cuanto al proyecto de directriz 2.9.2, sobre la oposición a una declaración interpretativa, su delegación comparte la opinión de que la expresión “a fin de excluir o limitar sus efectos” puede ser engañosa cuando se trata de distinguir claramente entre reservas y declaraciones interpretativas. Por otra parte, la propuesta de otra interpretación puede constituir, de hecho, una nueva

declaración interpretativa cuyo efecto sea el rechazo más que la mera oposición.

19. En lo que atañe al proyecto de directriz 2.9.3, sobre la recalificación de una declaración interpretativa, su delegación considera que los Estados y las organizaciones internacionales no deben estar facultadas para recalificar una declaración interpretativa formulada por otro Estado u organización internacional. Además, dado que una “reserva disfrazada” es una reserva y no una declaración interpretativa, la Comisión debería seguir reflexionando sobre el lugar idóneo de semejante disposición en la Guía de la práctica.

20. Preocupa un tanto a Portugal el proyecto de directriz 2.9.4. No debe permitirse que un Estado o una organización internacional formule una declaración interpretativa con respecto a un tratado o alguna de sus disposiciones en el marco del proceso de solución de una controversia que se refiera a la interpretación del tratado o la disposición en cuestión. Una solución prudente sería incluir una referencia al principio de buena fe. Por otra parte, el orador desearía saber por qué en el título del proyecto de directriz se utiliza el término “protesta” mientras que en el texto se emplea la palabra “oposición”.

21. Los proyectos de directriz 2.9.8, sobre la falta de presunción de aprobación o de oposición, y 2.9.9, sobre el silencio ante una declaración interpretativa, regulan dos cuestiones diferentes pero relacionadas. A diferencia de lo que ocurre en el caso de las reservas, no es posible presumir la aprobación de una declaración interpretativa ni la oposición a ella. Además, es un principio del derecho que el silencio no puede considerarse un modo de formular una declaración a no ser que sea claramente posible inferir lo contrario. En cuanto a las declaraciones interpretativas, no existe una norma general sobre el valor del silencio como modo de reaccionar, ni existe una expectativa legítima general de una reacción expresa. En lo que respecta a ese tipo de declaraciones, el silencio sólo debe tener un sentido determinado cuando su valor pueda inferirse claramente de la disposición de un tratado. En ese contexto, el segundo párrafo del proyecto de directriz 2.9.9 debería refinarse para aclarar el significado de la frase “algunas circunstancias particulares”.

22. En lo que respecta al proyecto de directriz 2.9.10, sobre las reacciones a las declaraciones interpretativas

condicionales, su delegación comparte la opinión de que tales declaraciones son distintas de las meras declaraciones interpretativas. Sin embargo, tampoco pueden considerarse como reservas, ya que hacen que la participación en el tratado en cuestión dependa de una determinada interpretación, mientras que las reservas tienen por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos del tratado. Habría que seguir trabajando para determinar claramente la naturaleza jurídica de las declaraciones interpretativas condicionales, acotar los efectos jurídicos y los procedimientos relacionados con ellas, y decidir sobre el mejor modo de regularlas.

23. La Guía de la práctica será extremadamente útil para los Estados y las organizaciones internacionales a la hora de abordar la compleja cuestión de las reservas a los tratados. Portugal alienta a la Comisión a terminarla lo antes posible.

24. Por lo que se refiere al tema “Responsabilidad de las organizaciones internacionales”, Portugal reitera su preocupación de que el proyecto de artículos sigue demasiado de cerca los artículos sobre la responsabilidad del Estado. Es preciso un enfoque que se centre más en los problemas específicos que plantea la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Por otra parte, el análisis de la Comisión debería reflejar las diferencias entre los Estados y las organizaciones internacionales y el hecho de que las competencias y facultades de las organizaciones internacionales, así como las relaciones entre éstas y sus miembros, varían considerablemente de una organización a otra.

25. El tema de las contramedidas, controvertido en lo que respecta a los Estados, es aún más problemático cuando se refiere a las organizaciones internacionales. Preocupan a su delegación las condiciones en las que las organizaciones internacionales pueden utilizar contramedidas o ser objeto de ellas. Además, el uso de ejemplos basados en la experiencia de la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio no es necesariamente apropiado y pone de relieve la falta de práctica pertinente y la dificultad de elaborar soluciones jurídicas adecuadas, generales y abstractas. También hay que distinguir a las contramedidas de otras medidas similares, teniendo en cuenta el origen, el fundamento jurídico, la naturaleza y la finalidad de la medida. Las medidas adoptadas por una organización internacional, conforme a sus normas internas, contra uno de sus miembros, como las

sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad, no pueden considerarse contramedidas. Dada la complejidad de las cuestiones que suscitan las contramedidas, resulta aconsejable abordar el tema con cautela.

26. También hay que ser cauto al examinar las dos cuestiones que se plantean en el cuarto informe del Relator Especial sobre la expulsión de extranjeros (A/CN.4/594), a saber, las personas con nacionalidad doble o múltiple y la desnacionalización. La Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. La nacionalidad debe contemplarse como un derecho inherente de la persona y no como una facultad del Estado. En ese contexto, la prohibición de que un Estado expulse a sus propios nacionales es una norma absoluta que no puede tener excepciones, incluso cuando la persona de que se trate tenga nacionalidad doble o múltiple. La prohibición en lo que respecta a esas personas no debe limitarse a los casos en que pueda producirse apatridia, como tampoco puede utilizarse la condición de tales personas como motivo para que el Estado eluda la prohibición. Por otra parte, una persona con doble o múltiple nacionalidad no puede considerarse como extranjero por los Estados cuya nacionalidad ostenta. Su delegación tampoco está convencida de que el concepto de nacionalidad dominante o efectiva sea pertinente para la expulsión de extranjeros.

27. No debe permitirse que los Estados utilicen la desnacionalización como expediente para eludir la prohibición de expulsar a los nacionales, incluso cuando se trate de personas con doble o múltiple nacionalidad. Además, su delegación no comparte la opinión de que la desnacionalización es admisible siempre que no provoque apatridia, no tenga carácter discriminatorio o arbitrario y se respeten ciertas garantías procesales.

28. **El Sr. Horváth** (Hungría) dice que el tema “Reservas a los tratados” merece toda la atención que se le ha dedicado. Los tratados son, con diferencia, la fuente más abundante del derecho internacional público y el orden internacional depende de la capacidad de los Estados de determinar los derechos y obligaciones que les incumben en virtud de los tratados. La Guía de la práctica proporcionará a los Estados una herramienta útil a ese respecto.

La aplicación rigurosa de las directrices también desincentivaría la formulación de reservas inválidas por los Estados, aspecto que reviste especial importancia para los tratados de derechos humanos. En cuanto a la cuestión concreta de las declaraciones interpretativas, su delegación considera que los proyectos de directriz 2.9.1 a 2.9.8 contienen aclaraciones útiles.

29. Por lo que se refiere al tema “Responsabilidad de las organizaciones internacionales”, su delegación respalda la propuesta del Relator Especial de que la Comisión, antes de seguir avanzando en su labor, revise los textos que ya han sido aprobados provisionalmente teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los Estados y las organizaciones internacionales. De este modo, el texto ganaría en coherencia y podrían volver a examinarse algunas cuestiones, como por ejemplo, la conveniencia de incluir disposiciones sobre la invocación de la responsabilidad de los Estados por las organizaciones internacionales. A ese respecto, Hungría observa que, dada la naturaleza excepcional de la Unión Europea, hay que extremar la cautela a la hora de extraer ejemplos de su práctica y sólo cabe actuar de ese modo después de examinar cuidadosamente si un determinado caso puede dar lugar a normas o principios generales.

30. En lo que respecta al tema “Expulsión de extranjeros”, Hungría sostiene que las personas que poseen doble o múltiple nacionalidad no pueden ser consideradas extranjeros en ninguno de los Estados de su nacionalidad. Las cuestiones relacionadas con la pérdida de la nacionalidad y la admisibilidad de la desnacionalización corresponden más bien al debate sobre el derecho de la nacionalidad, que tradicionalmente entra dentro de la jurisdicción interna de los Estados. El párrafo 4 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”, confirma implícitamente el principio de no expulsión de los nacionales. La prohibición de expulsión figura en suficientes acuerdos internacionales como para considerarla un derecho humano básico. El orador coincide con los miembros de la Comisión que han afirmado que la prohibición de la expulsión de nacionales, incluso de los que tienen doble o múltiple nacionalidad, es parte del derecho consuetudinario. Un argumento similar se expone en el párrafo 192 del informe. La Constitución de Hungría prohíbe

expresamente la privación arbitraria del derecho de los ciudadanos húngaros a entrar en Hungría, así como la expulsión de nacionales, con independencia de que tengan o no doble o múltiple nacionalidad.

31. Por lo que atañe al tema “Protección de las personas en casos de desastre”, su delegación preferiría que el instrumento propuesto revistiera la forma de directrices no vinculantes, del mismo modo que otros instrumentos internacionales pertinentes, como las Directrices sobre la facilitación y reglamentación nacionales de las operaciones internacionales de socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial, aprobadas en la 30ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La atención debe centrarse en el derecho de las víctimas a la asistencia humanitaria. Los principios de soberanía y no intervención no pueden servir de excusa para que un Estado afectado por un desastre deniegue a las víctimas el acceso a la asistencia. En cuanto al alcance del tema, su delegación considera que debe limitarse a los desastres naturales, excluyendo los desastres provocados por el hombre y los conflictos armados, tanto porque ya existen regímenes que regulan los conflictos armados como por el grave peligro que correría el personal del Estado que interviene.

32. Su delegación apoya plenamente las directrices seguidas por el Relator Especial en el tema “Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado”. Es significativo que en los últimos tiempos varios tribunales nacionales hayan llegado a conclusiones divergentes en casos relacionados con la inmunidad de los funcionarios del Estado. Es evidente que el derecho internacional debe ser más preciso al respecto. Por lo tanto, sería útil elaborar un resumen de los tratados, las normas del derecho internacional consuetudinario y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia pertinentes.

33. En cuanto a la obligación de los Estados de extraditar o juzgar, su delegación estima que las medidas para combatir la actividad delictiva mundial deben tener un alcance igualmente mundial. La cooperación de los Estados a tal fin es un requisito previo para el respeto del estado de derecho en los planos nacional e internacional. Tal cooperación no se limita a los ámbitos tradicionales, como el comercio de esclavos, la piratería y el *apartheid*, sino que se extiende a actividades como el terrorismo, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Es indudable que los Estados tienen la obligación de

extraditar o juzgar, con independencia de que existan o no tratados internacionales al efecto. Un análisis exhaustivo de los tratados y el derecho internacional consuetudinario existente en la materia, así como de la legislación nacional y la práctica estatal, permitiría determinar la naturaleza exacta de esa obligación.

34. **La Sra. Mitchell** (Canadá) observa, en relación con el tema “Expulsión de extranjeros”, que, como ha señalado el Relator Especial, corresponde a cada Estado soberano establecer mediante su legislación interna las condiciones para la pérdida de la nacionalidad y que esas normas son distintas de las que regulan la expulsión de extranjeros. Por consiguiente, su delegación acoge positivamente la recomendación del Relator Especial y el Grupo de Trabajo en el sentido de que no es necesario elaborar proyectos de artículo sobre los temas que el Relator Especial aborda en su cuarto informe. La Comisión debería adoptar un enfoque igualmente matizado y prudente en relación con otros aspectos del tema.

35. **La Sra. Alias** (Malasia), tras observar que el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales se basa en los artículos sobre la responsabilidad del Estado, dice que el derecho a invocar la responsabilidad internacional de una organización internacional es aceptable, ya que los principios que figuran en los artículos sobre la responsabilidad del Estado se aplican igualmente a las organizaciones internacionales.

36. En lo que se refiere a las contramedidas contra las organizaciones internacionales, su delegación considera que las restricciones impuestas a las contramedidas en los artículos sobre la responsabilidad del Estado deberían aplicarse también a las organizaciones internacionales. No obstante, la Comisión debería tener debidamente en cuenta las diferencias entre los Estados y las organizaciones internacionales a ese respecto.

37. **La Sra. Le Duc Hanh** (Viet Nam) dice que la labor de la Comisión sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales es importante y oportuna, dada la proliferación de organizaciones internacionales en el mundo moderno. Dado que tales organizaciones son muy diversas en cuanto a naturaleza, estructura, composición y tamaño, el proyecto de artículos debe tener un carácter general para que abarque al mayor número de organizaciones posible.

38. Su delegación alienta a la Comisión a que siga examinando el uso de las contramedidas por las organizaciones internacionales. No obstante, es preciso actuar con cautela, dada la escasa práctica disponible y el riesgo de que se abuse de las contramedidas, lo que podría poner en peligro el funcionamiento e incluso la existencia de una organización internacional. Su delegación apoya la propuesta de establecer un grupo de trabajo para examinar la cuestión. La Comisión también debe tener plenamente en cuenta las observaciones de los Estados y las organizaciones internacionales. Por otra parte, las contramedidas no pueden considerarse como algo similar a las sanciones que se imponen en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, ya que su alcance y objetivos son completamente diferentes.

39. **La Sra. Belliard** (Francia) dice que es indudable que los artículos sobre la responsabilidad del Estado son de utilidad a la hora de abordar el tema de la “Responsabilidad de las organizaciones internacionales”. En el proyecto de artículo 48 (“Admisibilidad de la reclamación”), especialmente en su párrafo 2, no es ocioso reiterar el deber de agotar cualquier recurso disponible y efectivo proporcionado por la organización antes de invocar la responsabilidad de ésta. A ese respecto, debería definirse el término, “recursos internos”, porque los particulares pueden tomar medidas contra un Estado ante órganos jurisdiccionales que no sean nacionales.

40. Las contramedidas no pertenecen realmente a las denominadas normas “secundarias” sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Sería más adecuado incluirlas en la categoría relativa al cumplimiento de las obligaciones internacionales y estarían íntimamente relacionadas con las normas sobre la solución pacífica de controversias internacionales. En cuanto a las contramedidas que pueden utilizarse contra las organizaciones internacionales, la práctica pertinente es excepcionalmente limitada, por lo que la Comisión debería ser muy cauta al abordar el tema. Actualmente, el debate en el seno de la Comisión se ha desplazado de la responsabilidad general de las organizaciones internacionales a cuestiones específicas relacionadas con las contramedidas que tales organizaciones pueden utilizar contra los Estados o incluso dentro de la propia organización. Como su delegación ha observado en el pasado, la Comisión podría haber abordado el tema de las contramedidas en un único estudio de los proyectos que se refieren

respectivamente a la responsabilidad del Estado y de las organizaciones internacionales. Las contramedidas sólo pueden examinarse en el contexto de la relación jurídica entre un Estado y las organizaciones internacionales en las que participa y las funciones y normas de esas organizaciones. Las contramedidas adoptadas por una organización internacional contra un Estado miembro o por un Estado miembro contra la organización son dos cuestiones distintas. No obstante, en ambos casos la existencia de normas propias de la organización significa que existen límites en cuanto al uso de contramedidas por una organización internacional o contra ella.

41. Dicho de otro modo, las medidas relativas a un Estado miembro adoptadas por una organización internacional en el ejercicio de sus funciones no deben calificarse de “contramedidas”, como a veces ha ocurrido en los debates de la Comisión. Por otra parte, la oradora tiene importantes reservas en cuanto a si debe permitirse que los Estados miembros de una organización internacional utilicen contramedidas contra esa organización, especialmente si se tiene en cuenta la falta de práctica significativa al respecto. Tal como el Comité de Redacción ha hecho en el proyecto de artículo 55 [52 bis] (A/CN.4/L.725/Add.1), debe establecerse una distinción entre esa posibilidad y la cuestión general del objeto y los límites de las contramedidas contra una organización internacional, que se regula en el proyecto de artículo 54 [52]. Sin embargo, el proyecto de artículo 55 [52 bis] no es en modo alguno claro. Cuando menos, el texto debería aclarar el sentido de la expresión “medidas apropiadas [...] de conformidad con las reglas de la organización”, que excluiría la adopción de contramedidas contra una organización. El proyecto de artículo también implica que las contramedidas deben considerarse un recurso de última instancia; pero eso ocurre con todas las contramedidas. Además, dado que las normas de una organización, por muy ampliamente que se entiendan, son inevitablemente una *lex specialis*, la oradora cuestiona las ventajas de ese proyecto de artículo, que, en un contexto codificador, se limitaría a sancionar indebidamente lo que, en esencia, es un supuesto hipotético. Por último, la oradora tiene dudas sobre la redacción del proyecto de artículo 54 [52], que, en su formulación actual, es ambiguo, y confía en que el comentario contribuya a aclarar el sentido de la disposición.

Se levanta la sesión a las 16.30 horas.